

ACACIAS META NOVIEMBRE 17-2020 D.L. 2150/95

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA

ART. 11

CAJUE 12 #7-65 BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA POR VÍA DE HECHO EN CONTRA DEL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS META Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO META.

ARTÍCULOS 13, 29 Y 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA

ARTÍCULOS 3, 4, 5 Y 6 DEL CÓDIGO PENAL

CORDIAL BALDO.

ME DIRIJÓ A SU HONORABLE ESCRITO CON EL FIN DE INTERPONER ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE LOS ENTES ANTES MENCIONADOS, BAJO LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

DESDE EL PASADO MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, HE VENIDO SOLICITANDO MI LIBERTAD CONDICIONAL ANTE EL JUZGADO 2 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS META, EN CONDICIÓN DE CONDENADO POR LEY 600 POR LOS DELITOS DE CONCIERTO PARA DELINQUIR EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON HOMICIDIO AGRAVADO. Y DE LAS DIFERENTES PETICIONES EL JUZGADO ME NIEGA MI LIBERTAD CONDICIONAL BAJO LOS ARGUMENTOS DE QUE LA CONDUCTA PUNIBLE FUE MUY GRAVE, HACIENDO ÉNFASIS EN LO DICHO POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ, EN LA SENTENCIA CONDENATORIA Y MANIFIESTA QUE LOS PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN GENERAL Y ESPECIAL COMO LA NECESIDAD DE REINA TIENEN PREVALENCIA SOBRE EL PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL (INTERLOCUTORIO 2154-1871 DE 2019 AGOSTO 27), LA CUAL RECONGO CON SUBSIDIO DE APELACION, EL 30-09-2019, EL JUZGADO SEGUNDO ME NIEGA EL RECURSO DE REPOSICIÓN CON LOS MISMOS ARGUMENTOS DEL 27-08-2019 Y ME CONCEDE LA ALZADA EN EL EFECTO SUSPENSIVO ANTE EL JUZGADO FALLADOR. EL 24-01-2020 ME NOTIFICA EL JUZGADO 2 DE EJECUCIÓN DE PENAS QUE INCORPORA DOCUMENTOS AL CAJUE DIENTE EN DONDE DEMUESTRO MI APELLO SOCIAL Y FAMILIAR Y QUE SEAN TENIDOS EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO. EL 30-04-2020, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO, RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN CON LOS MISMOS ARGUMENTOS QUE ENFATIZÓ EL JUZGADO 2 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y AUNADO A ESO, SE EQUIVOCA

AL ARGUMENTAR "QUE DEBE A HABERSE DESMOVILIZADO CONTI-  
NUO DESARROLLANDO ACTIVIDADES DELICTIVAS POR LAS QUE FUE CONDE-  
NADO". CORRECCION QUE HIZO EL 29-05-2020.

CON RESPECTO A LO ANTES MENCIONADO ME PERMITO HACER LAS  
SIGUIENTES APERCEPCIONES: LA "BREVE VALORACION DE LA CONDUCTA  
PUNIBLE" A QUE ALUDE EL ARTICULO 30 DE LA LEY 1709 DE 2014, AL  
MODIFICARSE EL INSTITUTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL, NO PUEDE  
ENTENDERSE COMO LA GRAVEDAD QUE HISTORICAMENTE A LIMITADO LA  
CONCESION DE ALGUNOS DEL MISMO ARTICULO 64 DEL CODIGO PENAL Y  
CON LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN EL TITULO PRIMERO DEL CODIGO  
PENITENCIARIO Y CARCELARIO; LO QUE ATENDIDA SU LITERALIDAD (QUE  
NO INCLUYE LA PALABRA GRAVEDAD) DEBE ARMONIZARSE CON EL NUNE-  
RAL SEGUNDO DEL MISMO. SEGUN EL ARTICULO 13 CONSTITUYE EL  
MARCO HERMENEUТИCO PARA LA INTERPRETACION DE LAS NORMAS  
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA QENA. LOS ARTICULOS 5 INCISO  
SEGUNDO, 9, 10, 10 A Y 12 DE LA LEY 65 DE 1993, INFORMAN CLARA-  
MENTE TAL HERMENEUТИCA AL ESTABLECER EN LA EJECUCION DE LA  
QENA, PRINCIPIO COMO "LA NECESIDAD DE QENA, LA RESOCIALIZA-  
CION COMO FIN FUNDAMENTAL DE LA QENA, LA INTERVENCION MINIMA  
EN LAS LIMITACIONES DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS INTERVOS  
Y EL SISTEMA PROGRESIVO Y GRADUAL DEL TRATAMIENTO PENITENCIA-  
RIO", EN SEDE DE EJECUCION DE QENAS, LA UNICA FORMA DE MEDIR  
LA RESOCIALIZACION, NO ES OTRA QUE EL ANALISIS DE LA PERSONALI-  
DAD DEL INTERVO, EN LA QUE JUEGAN SU DISCIPLINA, EL TRABAJO,  
EL ESTUDIO, LA FORMACION ESPIRITUAL, LA CULTURA, LA RECREACION  
Y EL DEPORTE CONFORME LO SEÑALA EL ARTICULO 10 DEL CODIGO PENI-  
TENCIARIO Y CARCELARIO. ES EL PUNTO DE SU PERSONALIDAD COMO  
EL MEDIO DE SU RESOCIALIZACION, DONDE JUEGA LA VALORACION DE LA  
CONDUCTA PUNIBLE, TODA VES QUE ESTA DICE MUCHO DE LA PERSONA-  
LIDAD DEL SENTENCIADO AL MOMENTO DE LA REALIZACION DEL DELITO.  
EL DECRETO 400 DE 1980, POR EJEMPLO, PARA LA CONCESION DE LA  
LIBERTAD CONDICIONAL EN SU ARTICULO 72, NO REFIERE "LA GRAVEDAD"  
"DE LA CONDUCTA PUNIBLE", SINO LA PERSONALIDAD, LA BUENA CONDUCTA  
EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y LOS ANTECEDENTES DE TODO  
ORDEN QUE PERMITAN SUPONER LA READAPTACION SOCIAL DEL PRL  
EN LA LEY 599 DE 2000, LA QUE EN SU ORIGINAL ARTICULO 64, SOLO  
TUVO EN CUENTA LA BUENA CONDUCTA EN EL ESTABLECIMIENTO CAR-  
CELARIO, A PARTIR DE LA CUAL SE PODRIA INFERIR LA NECESIDAD  
DE CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LA QENA. EN EL ARTICULO 5  
DE LA LEY 890 DE 2004, MODIFICO EL ARTICULO 64 DE LA LEY  
599 DE 2000 Y INCLUYO LA VALORACION DE LA "GRAVEDAD" DE

LA CONDUCTA REXNIBLE. PERO DICHO ARTICULO, FUE NOUEAMENTE  
MODIFICADO POR EL ARTICULO 30 DE LA LEY 1709 DE 2014, QUE  
ELIMINO LA PALABRA "GRAUEDAD". ELLO IMPLICA QUE HOY NO ES  
LA GRAUEDAD DE LA CONDUCTA REXNIBLE, SI NO, LA VALORACION DE  
LA CONDUCTA REXNIBLE, LA QUE AL LADO DEL DESEMPEÑO Y CONPOR-  
TAMIENTO DURANTE EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO, PERMITAN SOPOR-  
NOR EN EL INTERNO UNA PERSONALIDAD QUE EN EL TRATAMIENTO PE-  
NITENCIARIO HAYA DADO SU FRUTO PARA CONCLUIR EN LA NECESIDAD  
O NO, CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LA PENA. LA "VALORACION  
DE LA CONDUCTA REXNIBLE", TAL COMO QUEDO PLASMADO EN EL ARTI-  
CULO 30 DE LA LEY 1709 DE 2014, NO PUEDE ENTENDERSE COMO UN  
REQUISITO MAS AL LADO DE LOS DESCRITOS EN LOS NUMERALES 4 Y 3  
DEL ARTICULO 64 DEL CODIGO PENAL. SI NO, COMO UN PARAMETRO  
PARA JUZGAR EN CADA CASO LA PERSONALIDAD DEL INTERNO Y PRE-  
VER LAS CONSECUENCIAS QUE SOBRE VENDRIAN CON LA SUSPENSION  
DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO, QUE SE INSISTE, LA PENA, EN  
LA FASE DE EJECUCION, CUMPLE FUNDAMENTALMENTE FINES DE:  
PREVENCIÓN ESPECIAL Y RESOCIALIZACION. COMO QUEDO ANTES  
EXPLICADO. NO SE PUEDE SUGGERIR EN EL INTERNO UNA PERSONA-  
LIDAD COMPATIBLE CON LA RESOCIALIZACION Y A RIGOR SEGUIDO  
NEGAR EL BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL, BAJO EL ARGUMENTO  
DE QUE EL JUEZ DE CONOCIMIENTO CONSIDERO COMO GRAUEDAD. SUMA  
LA CONDUCTA DESLEGADA POR EL INTERNO, NO ESTA BIEN NEGAR LA LIBER-  
TAD CON SOLAMENTE EN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCOMITABLES AL  
HECHO REXNIBLE QUE DIO LUGAR A LA CONDENA Y EN TODO CASO,  
EN LAS ANTERIORES AL INICIO DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO, DESA-  
TENDIENDO POR COMPLETO LAS QUE INFORMAN SOBRE SU COMPORTA-  
MIENTO DURANTE EL LARGO LAESO DE PRIVACION DE LIBERTAD EFEC-  
TIVA, QUE SON INDICATIVAS DE LA PERSONALIDAD ACTUAL DEL SENTEN-  
CIADO Y FUNDAMENTALES PARA INFERIR LA NO NECESIDAD DE LA CONTI-  
NUACION DEL TRATAMIENTO Y CONSERUIBEMENTE DEL OTORGAMIENTO  
DEL BENEFICIO, COMO ESTAS SON CONCLUYENTES EN LA CONDUCTA EXCELENTE  
DEL CONDENADO DURANTE SU RECLUSION.

EN LA SENTENCIA C-194 DE 2005, LA CORTE CITO EXTENSAMENTE  
SU PROPIA JURISPRUDENCIA ASI COMO LA DE LA CORTE SUPREMA DE  
JUSTICIA QUE RECONOCEN NO SOLO LA IMPORTANCIA DE TENER EN  
CUENTA LA GRAUEDAD DE LA CONDUCTA REXNIBLE, SI NO, LA PERSONA-  
LIDAD Y LOS ANTECEDENTES DE TODO ORDEN PARA EFECTOS DE  
EVALUAR EL PROCESO DE LA READAPTACION SOCIAL DEL CONDENADO.

UNA DE LAS SENTENCIAS CITADAS POR LA CORTE EN AQUELLA OCASIÓN, RECONOCE EXPLÍCITAMENTE LA IMPORTANCIA QUE REVISTE LA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA CONVULSA, SU GRAVEDAD Y SUS MAS DIMENSIONES, CIRCUNSTANCIAS Y ELEMENTOS, ASÍ COMO LA VALORACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL SENTENCIADO Y SUS ANTECEDENTES PARA EVALUAR SU PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN. QUIERE DECIR LO ANTERIOR QUE AL MOMENTO DE TOMARSE LA DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL, ES CIERTO QUE DEBE TENERSE EN CONSIDERACIÓN LA CONDUCTA CONVULSA, MAS NO PUEDE SER ESA VALORACIÓN QUE HICIERA EL JUEZ EMISOR DE LA SENTENCIA RECURRIDA, EL ÚNICO MOTIVO PARA NEGAR LA LIBERTAD CONDICIONAL. SIGNIFICA LO ANTES EXPOSTO, QUE EL JUEZ A CARGO DE LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, DEBE HACER UN JUICIOSO ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO, EN CLAVE DE DETERMINAR - ASÍ SEA EN SEDE DE EJECUTIVA CON RAZONABLE POSIBILIDAD DE CONCRECIÓN - QUE EL INTERNO A HECHO MERITOS SUSCEPTIBLES DE SER VALORADOS OBJETIVA Y SUBJETIVAMENTE Y QUE DE ESOS MERITOS QUEDE COLEGIARSE, CON ESA MISMA RAZONABILIDAD QUE SU PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL, GOZA DE UN PRONÓSTICO FAVORABLE DE CARA A LA CONCESIÓN DEL MECANISMO DESARROLLADO EN EL ARTÍCULO 64, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 1709 DE 2014, DE NO TENERSE EN CUENTA, NO SOLO EL CASO INEXORABLE DEL TIEMPO, SINO TAMBIÉN LA CONDUCTA DEL INTERNO DURANTE EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN, SE ESTARÍA ATENTANDO CONTRA EL PRINCIPIO LÓGICO DE NO CONTRADICCIÓN DEL QUE SE DESPRENDE QUE "ALGO NO PUEDE SER Y NO SER AL MISMO TIEMPO", ES DECIR, NO ES DABLE RECONOCER LA EXISTENCIA DEL MECANISMO DE LIBERTAD CONDICIONAL Y AL MISMO TIEMPO NEGAR SU EXISTENCIA - POR NO APLICACIÓN - BAJO CONSIDERACIONES QUE RINAN CON LOS PRESUPUESTOS Y EXIGENCIA DE DICHA INSTITUCIÓN JURÍDICA, PUES A LA PAR CON EL TIEMPO QUE PASA EN LA CANTIDAD DETERMINADA LEGALMENTE COMO REQUISITO DE NATURALEZA OBJETIVA, NO PUEDE DESCONOCERSE QUE LA BUENA CONDUCTA DEL INTERNO PERMITE SOSTENER QUE Pese A LA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA DELINCUENCIAL POR LA QUE FUE ALCADO CULPABLE, HA RECONOCIDO SU ERROR Y CON SU COMPORTAMIENTO INTERCARCELARIO QUIERE DEMOSTRARLE AL SISTEMA POLÍTICO Y A LA COMUNIDAD, QUE ES MERECEADOR DE UN PRONÓSTICO A SU FAVOR, POR EL CUMPLIMIENTO REAL Y EFECTIVO DE LAS 3/5 PARTES DE LA PENA Y HABER RESPETADO EL REGLAMENTO CARCELARIO. ASPECTO ESTE ÚLTIMO

QUE DE ACUERDO CON LA REALIDAD SOCIAL, NO RESULTA DEL TODO FACIL, SI SE RECONOCE QUE LA INSTITUCION DE LA PRISION ANTES QUE PROPENDER POR LA REINSECCION SOCIAL Y TODO LO QUE EL CONCEPTO IMPLICA, PROPICIA QUE LA POBLACION CARCELARIA SIGA SIENDO SUSCEPTIBLE DE LA COMISION DE CONDUCTAS CONTRARIAS A DERECHO. NO SOLO POR LA FALTA DE EFECTIVOS CONTROLES QUE SE DIFICULTAN ATENDIENDO CRITERIOS DEMOGRAFICOS, SINO TAMBIEN POR QUE NO SIEMPRE SE PUEDE PREDICAR UN TRATO DIGNO EN LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL PAIS QUE SE MANIFIESTAN EN LA FALTA DE ATENCION MEDICA Y LA SATISFACCION DE LAS MINIMAS CONDICIONES BASICAS QUE DEBE TENER TODO SER HUMANO PARA COEXISTIR DE MANERA DIGNA AUN BAJO EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS QUE RESTRIJAN SU LIBERTAD, PUES DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA AFECTACION DE LA LIBERTAD DE LOCOMOSION DE LOS CONDENADOS, NO LLEVA IMPLICITA LA ANULACION DE LOS OTROS DERECHOS BASICOS TALG COMO EL DE RECIBIR UNA ALIMENTACION DECENTE, EL DE SER DESTINARIO DE UNA ATENCION MEDICA A TIEMPO Y EL DE COHABITAR CON OTROS REOS EN CONDICIONES QUE NO RAYEN CON EL HACINAMIENTO O AMONTONAMIENTO DE CUERPOS EN CELDAS DONDE PARECIERE QUE NO HAY CAVIDA PARA LA ESPERANZA DE REINSECCION SOCIAL; POR ESTAS RAZONES SENCILLAS, EL INTERNO QUE PASE A LAS ADVERSIDADES PROPIAS DEL SISTEMA CARCELARIO, PONE TODO O ALGO DE SI, PARA GANAR DE NUEVO LA CONFIANZA DE SUS CONGENERES, DEBE SER TRATADO CON LA VENEROLENCIA QUE SE DESPRENDE DE UNA CORRECTA INTERPRETACION DE LAS NORMAS JURIDICAS CONSTITUTIVAS DE MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISION.

POR OTRO LADO Y PARA REFORSAR ESTE SENCILLO ARGUMENTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL HA SEÑALADO EN MULTIPLES OPORTUNIDADES QUE EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO PRESENTA DOS DIMENSIONES FUNDAMENTALES: LA PRIMERA DE ELAS TIENE QUE VER CON EL PROPOSITO DE LOGRAR LA RESOCIALIZACION DEL DELINCUENTE; Y LA SEGUNDA Y NO MENOS IMPORTANTE, REFERIDA A LA RELACION QUE EXISTE, ENTRE EL DERECHO A ACCEDER A PROGRAMAS DE ESTUDIO O TRABAJO QUE PERMITAN REDIMIR PENA Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD PERSONAL. ASI LO HA EXPRESADO LA ALTA CORPORACION: "EL TRABAJO DESARROLLADO POR LOS PRESOS, ES UN MEDIO INDISPENSABLE - JUNTO CON EL ESTUDIO Y LA ENSEÑANZA - PARA ALCANZAR

EL FIN RESOCIALIZADOR DE LA PENA Y HACE PARTE INTEGRAL DEL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO A LA LIBERTAD, QUE TIENE LA VIRTUD DE AMINORAR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PENA A TRAVÉS DE SU REBAJA O REDENCIÓN, POR LA ESPECIAL RELACIÓN DEL TRABAJO CON EL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE LOS PRESOS. LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA TIENE A SU CARGO EL DEBER DE PROCURARLES, EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES, DE UNA ACTITUD LABORAL COMO FORMULA DE SUPERACIÓN HUMANA Y MEDIO PARA CONSERVAR LA LIBERTAD".

ESTE PRONÓSTICO DIAGNÓSTICO DE CONSIDERAR SI EL CONDENADO EN LA HORA DE AHORA, AUN REPRESENTA UN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD Y SUS CONGÉNERES, DEBE APOYARSE EN SUS ANTECEDENTES PENALES, ANTES Y DESPUÉS DE LA CONDUCTA PUNIBLE POR LA QUE SE LE JUZGÓ, QUE PARA EL CASO SUBJUDICE NO SE REPORTA EL DESPUÉS. LA BUENA CONDUCTA MIENTRAS PERMANECIÓ PRIVADO INTRAMURALMENTE, SU ESFUERZO Y REOCUPACIÓN SIEMPRE POR MOSTRAR RESOCIALIZACIÓN, SU OCUPACIÓN AL INTERIOR DEL PENAL QUE LE PERMITIÓ REDIMIR TIEMPO DE DETENCIÓN; PERMITE DEDUCIR QUE ES MUY PROBABLE QUE NO CONTINUARA EN ACTIVIDAD DELICTIVA, QUE HA SUPERADO ESE CAMINO EVOCADO POR EL QUE UN DÍA OYÓ Y QUE LO HA SEPARADO POR MÁS DE 13 AÑOS Y 9 MESES DE SU FAMILIA, POR LO QUE SE PUEDE ASSEGURAR QUE SE HAN CUMPLIDO LOS FINES DE LA PENA, COMO PREVENCIÓN GENERAL, RETRIBUCIÓN JUSTA, PROTECCIÓN AL CONDENADO, PREVENCIÓN ESPECIAL Y REINSECCIÓN SOCIAL; CONSTITUYENDO ASÍ ESTOS FINES DE LA PENA, LA RAZÓN Y EL HORIZONTE, Y ES ALLÍ DONDE EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE ENTRAR A VALORAR TODAS LAS CONDICIONES RELATIVAS AL DESEMPEÑO PERSONAL, FAMILIAR, LABORAL Y SOCIAL DEL CONDENADO, QUE SI BIEN DE ELLOS SE TRATA EXPLÍCITAMENTE EN EL ARTÍCULO 38 DEL C.P.

LA DECISIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL DEL ESTADO COLOMBIANO EN CUANTO A LOS PRINCIPIOS Y LOS FINES DE LA PENA, ES LA ADOPTADA EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DEL CÓDIGO PENAL. DESDE ESA ÓPTICA, LA FUNCIÓN DE "RETRIBUCIÓN JUSTA", PUEDE ABORDARSE DE MANERA GENERAL EN DOS ESTADIOS CLARAMENTE DIFERENCIADOS DEL PROCESO PENAL, COMO CRITERIO QUE INFLUYE EN LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA, EN CUANTO ES EN TAL MOMENTO QUE SE DEFINE LA MEDIDA DE LA RETRIBUCIÓN Y SE DETERMINA SU CONTENIDO DE JUSTICIA, DE MANO DE LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD; Y COMO FUNCIÓN VINCULADA A LA



A LA EJECUCION DE LA PENAL, QUE NO QUEDE SER DEJADA DE SOFRESAR CUANDO VAYA A ENJUICIARSE LA ADOCCION DE PROVIDENCIAS QUE ANTICIPEN MATERIAL Y CONDICIONALMENTE UNA PARTE DE LA PRIVACION EFECTIVA DE LA LIBERTAD O LA SUBRAGUEN POR UN PERIODO DE PRUEBA. CASACION RADICADO 34962 P/ JAMES GUARIN VASQUEZ Y OTROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Y PROSIGUIENDO CON LO DICHO EN LA CASACION DE RADICADO 34962, DICE: "IGUAL COSA OCURRE CON LA FUNCION DE "PREVENCION GENERAL", A TRAVES DE LA CUAL SE ADVIERTE A LA SOCIEDAD DE LAS CONSECUENCIAS REALES QUE PUEDE SOPORTAR CUALQUIERA QUE INCURRA EN UNA CONDUCTA PUNIBLE. PARADOJICAMENTE EL HOMBRE SE VE COMPELIDO A PROTEGER LA SOCIEDAD MEDIANTE LA AMENAZA A LOS INDIVIDUOS QUE LA COMPOENEN, PORQUE EL ORDEN JURIDICO ES UN SISTEMA QUE OPERA BAJO LA FORMULA ACCION - REACCION, SUQUESTO - CONSECUENCIA JURIDICA. ESE FIN DE "PREVENCION GENERAL", ES IGUALMENTE APRECIABLE TANTO PARA LA DETERMINACION JUDICIAL DE LA PENAL COMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA, PUES SE PREVENE NO SOLO POR LA IMPOSICION DE LA SANCION, SINO Y SOBRE TODO, DESDE LA CERTEZA, LA EJEMPLARIZACION Y LA MOTIVACION NEGATIVA QUE ELLA GENERA (EFECTO DISUASIVO), ASI COMO DESDE EL AFIANZAMIENTO DEL ORDEN JURIDICO (FIN DE PREVENCION GENERAL POSITIVA)".

EN LA SENTENCIA T-528 DE 2000, LA CORTE ANALO ESTA POSIBILIDAD EN RELACION CON DECISIONES DE LOS JUECES DE EJECUCION DE PENAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CODIGO PENAL ANTERIOR, EN EL CUAL ESTOS DEBIAN TENER EN CUENTA LOS ANTECEDENTES DE LOS CONDENADOS Y SU PERSONALIDAD. ELLO PERMITE AL JUEZ EJECUTOR DE PENAS, RECOGER UN MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS DE CONTEXTO EN RELACION CON LA CONDUCTA PUNIBLE QUE QUEDEN SER FAVORABLES AL CONDENADO, DE TAL MODO QUE LA AMPLIACION DEL CONJUNTO DE ELEMENTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE DECIDIR SOBRE LA LIBERTAD CONDICIONAL, NO CONSTITUYE POR SI MISMA UN DEFECTO DE CONSTITUCIONALIDAD. A PESAR DE LO ANTERIOR, LA AMPLIACION DEL CONJUNTO DE FACTORES QUE QUEDA TENER EN CUENTA EL JUEZ NO ES EL UNICO EFECTO DE HABER REMOVIDO LA ALUSION A LA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA. EN SU REDACCION ACTUAL, EL ARTICULO 30 DE LA LEY 1709 DE 2014, SOLO ORDENA AL JUEZ OTORGAR LA LIBERTAD CONDICIONAL "PREVIA VALORACION DE LA CONDUCTA PUNIBLE", PERO NO EXISTE EN EL TEXTO DE LA DISPOSICION ACUSADA, UN ELEMENTO QUE LE DE AL JUEZ DE EJECUCION DE PENAS UN PARAMETRO O CRITERIO DE ORDENACION CON RESPECTO A LA MANERA

COMO DEBE EFECTUAR LA VALORACION DE LA CONDUCTA QUINIBLE. EN ESTA MEDIDA, EL PROBLEMA NO CONSISTE UNICAMENTE EN QUE NO SEA CLARO QUE OTROS ELEMENTOS DE LA CONDUCTA DEBE TENER EN CUENTA EL JUEZ DE EJECUCION DE PENAS; EL PROBLEMA ES QUE LA DISPOSICION TAMPOCO LE DA UN INDICIO DE COMO DEBE VALORARLOS. EN CONCLUSION LA REDACCION ACTUAL NO ESTABLECE QUE CIRCUNSTANCIAS, ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA CONDUCTA QUINIBLE HECHAS POR EL JUEZ PENAL EN LA SENTENCIA CONDENATORIA, DEBE TENER EN CUENTA EL JUEZ EJECUTOR, SEAN ESTAS FAVORABLES O DESFAVORABLES AL OTORGAMIENTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL. DE LAS FUNCIONES DE LA PENAL DEL ARTICULO 4 DEL CODIGO PENAL, SOLO LA PREVENCIÓN ESPECIAL Y LA REINSERCIÓN SOCIAL SON LAS PRINCIPALES QUE COBRAN FUERZA EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA PENAL DE PRISION, DE TAL FORMA QUE COMO LO HA RECONOCIDO LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL DESDE SUS INICIOS, EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO, LA EJECUCION DE LA SANCION PENAL ESTA ORIENTADA HACIA LA PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA, ESTO ES, EN ESTA FASE SE BUSCA ANTE TODO LA RESOCIALIZACION DEL CONDENADO RESPECTANDO SU AUTONOMIA Y LA DIGNIDAD HUMANA COMO PILAR FUNDAMENTAL DEL DERECHO PENAL. DE ALLI QUE LA TEORIA ACTUAL DE LA PENAL REFIERA QUE EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO DEBA ESTAR DIRIGIDO A LA CONSECUCIÓN DE LA REEDUCACION Y LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS PENADOS Y DEBA PROPONDER PORQUE EL CONDENADO TENGA LA INTENCION Y LA CAPACIDAD DE VIVIR RESPECTANDO LA LEY PENAL, EN DESARROLLO DE UNA ACTITUD DE RESPETO POR SU FAMILIA, EL PROXIMO Y LA SOCIEDAD EN GENERAL. ES LO QUE SE CONOCE COMO LA HUMANIZACION DE LA PENAL A PARTIR DEL POSTULADO DE LA DIGNIDAD HUMANA QUE ESTABLECE EL ARTICULO PRIMERO DE LA CONSTITUCION POLITICA.

AHORA BIEN, MUCHAS VECES SE PRESENTAN TENSIONES ENTRE LA PREVENCIÓN GENERAL Y LA PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA. TALES TENSIONES SE MATERIALIZAN EN QUE LA PREVENCIÓN GENERAL ACONSEJA PENAS MAS SEVERAS, MIENTRAS QUE LA PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA PARTE DE LA BASE DE POLITICAS DE RESOCIALIZACION QUE SUGIEREN PENAS BAJAS.

ESTA DISCUSION FUE ABORDADA EN LA SENTENCIA C-261 DE 1996, EN LA CUAL LA CORTE CONCLUYO QUE: (i) DURANTE LA EJECUCION DE LAS PENAS DEBE PREDOMINAR LA BUSQUEDA DE LA RESOCIALIZACION DEL DELINCUENTE, Y A QUE ESTO ES UNA CONSECUENCIA NATURAL DE LA DEFINICION DE COLOMBIA COMO UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO FUNDADO EN LA DIGNIDAD HUMANA; (ii) EL ESTABLECE QUE DEBEN ATENDERSE A LAS VALORACIONES DE LA CONDUCTA QUE PREVIAMENTE HICIERON LOS JUECES PENALES. ESTE NIVEL DE IMPRECISION EN



RELACION CON LA MANERA COMO DEBE EFECTUARSE LA VALORACION DE LA CONDUCTA PUNIBLE POR PARTE DE LOS JUECES DE EJECUCION DE PENAS, AFECTA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA PENA, EL CUAL ES UN COMPONENTE FUNDAMENTAL DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL. POR LO TANTO LA REDACCION ACTUAL DE LA EXPRESION DEMANDADA TAMBIEN RESULTA INACEPTABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL; (iii) DIFERENTES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS ESTABLECEN LA FUNCION RESOCIALIZADORA DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO, DE TAL FORMA QUE LA PENA DE PRISION O INTRAMURAL NO PUEDE SER CONSIDERADA COMO LA UNICA FORMA DE EJECUTAR LA SANCION IMPOSTA AL CONDENADO. AL RESPECTO EL ARTICULO 10.3 DEL PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE LAS NACIONES UNIDAS, CONSAGRA QUE EL REGIMEN PENITENCIARIO CONSISTE EN UN TRATAMIENTO CUYA FINALIDAD ESENCIAL ES LA REFORMA Y LA READAPTACION SOCIAL DE LOS PENADOS. EN EL MISMO SENTIDO EL ARTICULO 5.6. DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, ESTIPULA QUE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD, TIENEN COMO FINALIDAD ESENCIAL LA REFORMA Y LA READAPTACION SOCIAL DE LOS CONDENADOS. ASI LAS COSAS, EL ESTADO ESTA EN LA OBLIGACION DE PROCURAR LA FUNCION RESOCIALIZADORA DE LAS PERSONAS CONDENADAS A PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. POR LO TANTO, LA PENA NO HA SIDO PENSADA UNICAMENTE PARA LOGRAR QUE LA SOCIEDAD Y LA VICTIMA CASTIGUEN AL CONDENADO Y QUE CON ELLO VEAN SUS DERECHOS RESTITUIDOS, SINO QUE RESPONDE A LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA RESOCIALIZACION COMO GARANTIA DE LA DIGNIDAD HUMANA.

DE ACUERDO CON LO EXPUSTO, A TITULO DE SINTESIS, LA SALA ESTIMA QUE SOLO ES COMPATIBLE CON LOS DERECHOS HUMANOS LA EJECUCION DE LAS PENAS QUE TIENDE A LA RESOCIALIZACION DEL CONDENADO, ESTO ES, A SU INCORPORACION A LA SOCIEDAD COMO SUJETO CAPAZ DE RESPETAR LA LEY. POR CONSIGUIENTE, ADQUIERE PREPONDERANCIA LA POLITICA PENITENCIARIA EJECUTADA POR EL INDEC Y VIGILADA POR EL JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, QUE ES A ESTE ULTIMO EN ASOCIO CON LOS CONCEPTOS QUE EMITA EL INDEC, A QUIEN LE CORRESPONDE EVALUAR, SEGUN LOS PARAMETROS FIJADOS POR EL LEGISLADOR, SI ES POSIBLE QUE EL CONDENADO AVANCE EN EL REGIMEN PROGRESIVO Y QUEBA ACCEDER A MEDIDAS DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE MENOR CONTENIDO COERCITIVO (LIBERTAD CONDICIONAL, PRISION DOMICILIARIA, ENTRE OTROS SUBROGADOS PENALES), LOGRANDO LA READAPTACION SOCIAL DEL CONDENADO.

LA SENTENCIA T-640 DE 2017 REFIRIO: LA DECISION DE UNA SOLICITUD DE LIBERTAD CONCRETA, ADENAS DE LO ANTERIOR,

DEBERA ATENDER EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD CONFORME A LOS ARTICULOS 29 DE LA CONSTITUCION NACIONAL Y 6 DEL CODIGO PENAL, SEGUN LOS CUALES EN MATERIA PENAL "LA LEY PERMISIVA O FAVORABLE, AUN CUANDO SEA POSTERIOR SE APLICARA SIN EXCEPCION, DE PREFERENCIA A LA RESTRICTIVA O DESFAVORABLE". ASI LOS JUECES COMPETENTES PARA DECIDIR ACERCA DE UNA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL DEBEN INTERPRETAR Y APLICAR EL OBJETO DEL DERECHO PENAL EN UN ESTADO COMO EL COLOMBIANO. NO ES EXCLUIR AL CONDENADO DEL PACTO SOCIAL, SINO BUSCAR SU REINSERCCION EN EL MISMO.

"LA PRISION INTRAMURAL NO PUEDE SER CONSIDERADA COMO LA UNICA FORMA DE EJECUTAR LA SANCION IMPUESTA AL CONDENADO" YA QUE ELLO IMPLICARIA "MEVOSPRECIAR LA FUNCION RESOCIALIZADORA DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO".

EN LA SENTENCIA STP 15806 DEL 19-11-2019, MAGISTRADA CONENTE DRA. PATRICIA SALAZAR CUELLAR, DENTRO DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DA CANTAS PARA JUECES PENALES A LA HORA DE CONCEDER EL SUBROGADO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL. SE SEÑALO QUE LOS JUECES DE EJECUCION DEBEN VELAR POR LA REEDUCACION Y LA REINSERCCION SOCIAL DE LOS PENADOS, COMO UNA CONSECUENCIA NATURAL DE UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO FUNDADO EN LA DIGNIDAD HUMANA, QUE PERMITE HUMANIZAR LA PENA DE ACUERDO CON LA CONSTITUCION POLITICA Y EVITAR CRITERIOS RETRIBUTIVOS DE PENAS MAS SEVERAS. SI BIEN ESTE FUNCIONARIO EN SU VALORACION DEBE TENER EN CUENTA LA CONDUCTA PUNIBLE, ADQUIERE PREPONDERANCIA LA PARTICIPACION DEL CONDENADO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, COMO UNA ESTRATEGIA DE READAPTACION SOCIAL. EN EL PROCESO DE RESOCIALIZACION, PUES EL OBJETO DEL DERECHO PENAL NO ES EXCLUIR AL DELINCUENTE DEL PACTO SOCIAL, SINO BUSCAR SU REINSERCCION EN EL MISMO. EN TAL SENTIDO, SE HAN INCORPORADO CRITERIOS DE VALORACION PARA QUE LA INTERPRETACION DEL ARTICULO 64 DEL CODIGO PENAL SE GUIE POR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, COMO BIEN LO ES EL PRINCIPIO DE INTERPRETACION PRO HOMINE PARA CENTRARLA EN AQUELLO QUE SEA MAS FAVORABLE AL HOMBRE Y SUS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS A NIVEL CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL RAD. 107644.

HONORABLES MAGISTRADOS, SE ESTA INCORRIENDO EN UNA VULNERACION AL DEBIDO PROCESO, PUES SE ESTA DANDO UNA MALA INTERPRETACION AL ARTICULO 30 DE LA LEY 1709 DE 2014, DESCONOCIENDO LOS RAZONAMIENTOS QUE FRENTE A DICHA NORMA HA DESARROLLADO LA CORTE CONSTITUCIONAL, LO QUE IMPLICA UN DESCONOCIMIENTO

DE PROCEDENTE JUDICIAL DE LAS ALTAS CORTES, INCURRIENDO EN UN DEFECTO SUSTANTIVO, PRESENTANDO UNA FALTA MOTIVACIONAL ORIGINADA EN EL PROCESO DE INTERPRETACION Y APLICACION DEL ARTICULO 64 DEL CODIGO PENAL, MODIFICADO POR EL ARTICULO 30 DE LA LEY 1709 DE 2014, Y QUE DICHAS DECISIONES DEL JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS DE ACACIAS Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO, SE CALIFICAN COMO CONSTITUTIVAS DE UNA VIA DE HECHO DERIVADA DEL DEFECTO CONOCIDO COMO DECISION SIN MOTIVACION QUE SE CONFIGURA "CUANDO LA SENTENCIA ATACADA CARECE DE LEGITIMACION, DEBIDO A QUE EL SERVIDOR JUDICIAL INCUMPLIO SU OBLIGACION DE DAR CUENTA DE LOS FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS QUE LA SOSTORTAN" (C-590/2005 Y T-041/2018 ENTRE OTRAS).

DESDE POR FAVOR SE ME RESTITUYAN MIS DERECHOS A LA LIBERTAD, DEBIDO PROCESO Y SE ME OTORQUE MI LIBERTAD CONDICIONAL, YA QUE CUMPLI CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY.

ANEXO: • NOTIFICACIONES DEL JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS DE ACACIAS, DE FECHAS: 29-08-2019, 30-09-2019, 24-01-2020, 26-08-2020 Y 29-10-2020.  
• COPIAS DE NOTIFICACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO DE FECHAS: 30-04-2020 Y 29-05-2020.

AGRADEZCO SU VALIOSA Y PRONTA COLABORACION Y QUE DIOS LOS BENDIGA.

ATT.

RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO

TD. 12708

RATIA-20

E.Q.M.S.C. DE ACACIAS META



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE  
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE  
ACACIAS - META

Veintisiete de Agosto de dos mil diecinueve

12708  
A-20

CUI: 13 001 31 87 001 2008 00102 00  
Número Interno: 2017-0039  
Sentenciada: RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO  
Delito: Concierto para delinquir en concurso  
heterogéneo con homicidio agravado  
Actuación: De parte  
Autoridad: Especializado  
Procedimiento: Ley 906  
Interlocutorio No: 1871

I. VISTOS:

Se examina la documentación arrimada por el reclusorio que lo custodia para efectos de LIBERTAD CONDICIONAL y redención de pena a favor del señor RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO, recluso en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias, Meta.

Así mismo se pronunciará el despacho en torno a la petición de REDENCION DE PENA.

II. ANTECEDENTES

2.1. Por hechos ocurridos entre el año 2006 hasta el 12 de febrero de 2007 RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO fue condenado por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2009, a la pena principal de 324 MESES DE PRISION, Y las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años por ser declarado como autor del delito de Concierto para Delinquir en concurso heterogéneo con Homicidio Agravado. Se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 3 de febrero de 2011 la confirmó en su integridad.

2.2 En virtud de este proceso está privado de la libertad desde el 12 de febrero de 2007, a la fecha, lo que implica que ha purgado físicamente 150 meses 15 días.

2.3. Como redención de pena se ha reconocido en su favor 43 meses 20.25 días.

I. CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO

Durante el desarrollo de esta decisión judicial serán resueltos los siguientes interrogantes: a) ¿Se satisfacen los presupuestos definidos por el artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario para otorgar la redención de pena con base en los

DGH.

Carrera 20 número 13 - 42, teléfono (8) 6569027  
[www.j02epmacacias@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:www.j02epmacacias@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Si se acudiera a la normativa adjetiva penal vigente para la época de los hechos, a la fecha no superaría las 2/3 partes de la pena.

Es por ello que se aplicara la norma actual que reza lo siguiente:

**"...Artículo 64. Libertad condicional.** El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:

1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.
2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.
3. Que demuestre arraigo familiar y social.

Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo.

En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.

El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario..."

Del supuesto normativo puede extraerse sus requisitos a saber:

- a) Cumplimiento de la pena en las 3/5 partes.

Bastase con determinar la detención jurídica y las redenciones de pena reconocidas, para concluirse que el de autos ha purgado un monto de pena superior a las 3/5 partes de la condena impuesta que corresponde a 194 meses y 12 días. Veamos:

CONCEPTO	MESES	DÍAS
DETENCIÓN FÍSICA	150	15.00
Redención concedida	x 45	22.25
Total	196	07.25

b) Reparación de perjuicios o en su defecto, aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre su insolvencia económica.

No fue condenado al pago de perjuicios.

- c) Existencia de arraigo social y familiar

Según el diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Arraigo es una acción o efecto de arraigar que es "Establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas".

A este respecto, se tiene que el condenado no remitió junto a su petición de libertad condicional documento alguno para acreditar su arraigo social y familiar, hecho que lleva al

DGH.

Carrera 20 número 13 - 42, teléfono (8) 6569027  
[www.j02epmacacias@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:www.j02epmacacias@cendoj.ramajudicial.gov.co)

120  
 24  
 144  
 12  
 144  
 1256  
 16645  
 4520  
 211

En este punto, debe remitirse el Estrado a la sentencia condenatoria que finalmente es la pieza procesal con la que cuenta este despacho para valorar la conducta punible infringida por el de autos, y en la que el Juez 1º Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el capítulo de "Hechos" dijo:

**"En ese contexto queda claro que, en Cartagena y municipios vecinos actúa parte de esa estructura criminal, es decir, la organización delincuenciales acá investigada denominada la banda de "LOS 40" o "LA EMPRESA", estructura que ha venido enfrentando a grupos de la misma catadura (sic) y propósitos como son las bandas de "LOS CANOS" "LOS CACHACOS o PAISAS".**

**En resumen, la demostración de hechos explica la real existencia y accionar de los grupos criminales de las denominadas bandas emergentes que desde el 2006 vienen actuando en medio de una disputa territorial por el control de la costa atlántica, y en este caso por Cartagena, estructuras que pertenecen a las denominadas bandas emergentes o "Águilas Negras".**

Más adelante en el numeral 6.3.1 de la sentencia condenatoria, se indicó:

**"Sobre los hechos jurídicamente relevantes que sustentan la evocación del comportamiento de marras, se puede extraer de la acusación, cuando se menciona que de acuerdo con la crónica judicial, se sabe de unos grupos al margen de la ley que han surgido como combinación de grupos "dedicados a actividades de narcotráfico, paramilitarismo, sicariato y delincuencia común...", como lo fue la Banda de Los 40 o de la Empresa, quienes empezaron a cometer un sinnúmero de delitos como homicidios selectivos en modalidad de sicariato y "limpieza social", hurto de hidrocarburos, extorsiones, cobro de vacunas o cuotas de seguridad a empresarios, ganaderos, comerciantes, etc., convirtiéndose en factor de amenaza, inseguridad y temor constante en las regiones y localidades en donde tiene sus centros de operación y disputa territorial con grupos que de Medellín u "Oficina de Envigado" perteneciente a la estructura de alias "MACACO" habían llegado para apoderarse de Barranquilla, Cartagena o Montería**

Más adelante en el numeral 6.3.2 manifestó:

**"El del homicidio del Nato y del Fletero, trabajó él junto con CESAR Y EL NENE (LARA ATENCIO), que dichos personajes se hallan presos en ternera; CESAR, dice el testigo, que es el que estaba con RONY y el NENE cayó por la muerte de EDWIN JUNCO, es decir, que RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO, hace referencia clara de que efectivamente era parte del personal de sicarios que pertenecían a la organización"**

Claro está que el condenado hacía parte de una agrupación criminal, dentro de la cual ejercía el papel de sicario en dicha organización delincuenciales, la que se dedicaba a realizar múltiples conductas delictivas como homicidios selectivos en la modalidad de sicariato, hurto de hidrocarburos, extorsiones, cobro de vacunas o cuotas de seguridad a empresarios, ganaderos comerciante etc.



comportamiento, mayor debe ser la exigencia de cara a la necesidad en la continuación en su cautiverio en aras de preservar los principios de prevención general y especial positiva. Sobre este último aspecto, la jurisprudencia constitucional señala lo siguiente:

"La necesidad de la pena exige de ella que sirva para la preservación de la convivencia armónica y pacífica de los asociados no sólo en cuanto ella por su poder disuasivo e intimidatorio evite la comisión de conductas delictuales, o por lo menos las disminuya, sino también en cuanto, ya cometidas por alguien, su imposición reafirme la decisión del Estado de conservar y proteger los derechos objeto de tutela jurídica y cumpla además la función de permitir la reincorporación del autor de la conducta punible a la sociedad de tal manera que pueda, de nuevo, ser parte activa de ella, en las mismas condiciones que los demás ciudadanos en el desarrollo económico, político, social y cultural".<sup>2</sup>

#### IV. OTRAS DECISIONES

1. Envíese copia de esta decisión al Director del Establecimiento de reclusión para que obre en la cartilla biográfica del penado.

2. Entréguese un ejemplar de la decisión al interno.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS (META)**

#### V. RESUELVE:

**PRIMERO:** REDIMIR PENA a **RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO** en un monto de 2 Meses 2 días.

**SEGUNDO:** NEGAR libertad condicional a **RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO**, de acuerdo con lo señalado en precedencia.

**TERCERO:** Dese cumplimiento al acápite de otras decisiones.

**CUARTO:** Contra la presente decisión proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación.

Notifíquese y cúmplase

AMPARO CUBILLOS LAVERDE  
JUEZ

32013  
020100  
2.12

32413  
024100  
2.16

<sup>2</sup> Sentencia C-647 de 2001

*Donde el magistrado estudian la  
libertad Condicional.*

*Intulo exterior.  
045 del 2019.*



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE  
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE  
ACACIAS - META

Treinta de septiembre de dos mil diecinueve

CUI: 13 001 31 87 001 2008 00102 00  
Número Interno: 2017-0039  
Sentenciada: RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO  
Delito: Concierto para delinquir en concurso  
heterogéneo con homicidio agravado  
Actuación: De parte  
Autoridad: Especializado  
Procedimiento: Ley 600  
Interlocutorio No: 2154

#### I. VISTOS

Se pronuncia el Despacho frente al recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por el penado **RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO**, contra el auto interlocutorio 1871 del 27 de Agosto de 2019, mediante el cual se le negó la libertad condicional.

#### II. DEL DISENSO

El penado presentó escrito en el que señala entre otras cosas que no está de acuerdo con la decisión del despacho ni la comparte, toda vez que el artículo 64 del C.P., señala que la persona condenada debe superar las 3/5 partes de la pena, término que ya se encuentra cumplido; indicó que todas las personas son iguales ante la ley, y que el despacho violó una ley de raigambre constitucional.

[REDACTED]

Que las afirmaciones hechas por este estrado judicial en la decisión que le negó libertad condicional son basadas en pronunciamiento de las Altas Cortes mal interpretadas.

De otra parte manifestó que fue juzgado y condenado dentro de los parámetros establecidos en la Ley 599 de 2000 y 600 de 200 y que por lo tanto la decisión de libertad condicional debió estudiarse con fundamento en al artículo 64 original del C.P.

Que se debe entender que la pena debe cumplir una función de prevención especial positiva y por lo tanto debe buscar la resocialización del condenado y que no se pueden negar los beneficios en razón a la personalidad que han debido ser tenidos en cuenta en la condena, ya que en esta instancia del proceso no se debe apreciar la personalidad para el momento de ocurrencia de los hechos sino al momento final de la ejecución de la pena.

Invocó el derecho a la igualdad y favorabilidad, y señaló que no se puede negar la libertad condicional basados en principios de prevención especial y general, porque si tiene prevalencia el principio de reinserción social.

DGH.

Carrera 20 número 13 - 42, teléfono (8) 6569027  
E mail. j02epmacacias@cendoj.ramajudicial.gov.co

12708  
A-20

Entonces, el penado ejecutó un comportamiento sumamente grave porque consciente y voluntariamente decidió hacer parte de esa organización delictual, la que, como ya se anotó, se dedicó, en términos generales a la comisión de conductas de suma gravedad como homicidios, por lo tanto sus miembros, sin lugar a dudas representan un peligro para la comunidad.

Como puede verse el despacho al analizar lo relacionado con la valoración de la conducta punible, tomó en cuenta todos los elementos objetivos relacionados en la sentencia condenatoria, y sobre este aspecto es importante traer algunos apartes, de la Sentencia STP8243-2018 con radicación No. 99026 del 26 de junio de 2018, en la que la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dijo:

***“Entonces, a pesar de que, en criterio del juzgado accionado el demandante cumpliera los requisitos objetivos para la concesión de la libertad condicional, ésta le fue negada luego de valorar la gravedad de la conducta, claro está, tras analizar los aspectos objetivos plasmados en la sentencia condenatoria que se dictó en su contra, sin que ello implique un nuevo juzgamiento.***

***Además, pacíficamente se ha expuesto que la competencia para evaluar el requisito subjetivo encaminado a determinar cuándo una persona condenada debe continuar con el tratamiento penitenciario, ha sido atribuida a los jueces de ejecución de penas y no al juez constitucional en sede de tutela (en ese sentido, CSJ STP, 30 de julio de 2013, Rad. 67963; CSJ STP, 31 de julio de 2013, Rad. 68049 y CSJ STP710 - 2015, entre muchas otras).***

***Concluye la Sala, en esas condiciones, que la decisión atacada no configura alguna «vía de hecho», es decir, una expresión de la judicatura sin respaldo en el ordenamiento jurídico aplicable y por el contrario, se aprecia que el despacho demandado, en su resolución del caso concreto, realizó una interpretación razonable y ponderada, que impide la intervención del juez de tutela.***

***Bajo tales condiciones, se hace imperioso confirmar el fallo de primer nivel”.***

De otra parte no es cierto que el despacho no haya analizado lo relacionado con el proceso de resocialización del interno y prueba de ello es que en la decisión atacada se plasmó que aunque no se desconoce que el sentenciado durante su confinamiento intramural ha presentado un buen desempeño, para este Despacho ello no es suficiente para predicarse el otorgamiento de la libertad condicional, toda vez que tiene mayor preponderancia ese principio de prevención general robustecido en la tranquilidad de la comunidad en general, ya que por las connotaciones de su comportamiento, no puede ser premiado con dicho beneficio.

Si bien es importante el proceso de resocialización el despacho no puede desconocer o pasar por alto la valoración de la conducta y por tal razón no puede invocar hechos como el deshacinamiento de las cárceles para pretender acceder a la libertad condicional de manera automática, únicamente con el cumplimiento de unos requisitos de orden objetivo, pues como la norma claramente lo prevé además de las exigencias de orden objetivo, también se deben estudiar otros requisitos, como lo es la valoración de la

Sin embargo, ello no es causa por la cual deba supeditarse la vigencia del artículo 5° de la Ley 890 de 2004 a la progresividad del sistema penal acusatorio, pues como antes se ha señalado, ninguna injerencia tenía esa figura con los allanamientos o preacuerdos o con el robustecimiento de la Ley 906 de 2004, ya que comportaba temas distintos.

Así las cosas, la modificación traída por el artículo 5° de la Ley 890 de 2004 cobra su vigencia a partir del 1° de enero de 2005, tal y como lo señala la propia normatividad, tal y como lo precisó el propio artículo 15 de esa Ley.

Dicha postura no es amañada, caprichosa o arbitraria sino que encuentra soporte jurídico con lo señalado por la propia Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien en su providencia del 22 de agosto de 2012 -Radicado 39431- fue clara en precisar que la vigencia de ese art. 5° de la Ley 890 de 2004 empezó desde el 1° de enero de 2005 y no en forma gradual, como sí ocurrió con el sistema Penal Acusatorio. Veamos:

"...El artículo 64 del Código Penal -Ley 599 de 2000- consagra como mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, el instituto de la libertad condicional, sujetando su concesión al cumplimiento por parte del condenado de determinadas exigencias, siempre que de su buena conducta en el establecimiento carcelario se pueda deducir que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena.

Toda vez que el precepto ha sufrido distintas modificaciones en los últimos años<sup>2</sup>, lo primero que se debe establecer es la norma aplicable, para una vez definida aquella, realizar un estudio en torno al cumplimiento de las exigencias para acceder al beneficio.

El asunto se resuelve al precisar cuál es la disposición vigente al momento de ocurrencia de los hechos, para lo cual es preciso acudir a la sentencia que es la que ofrece los elementos de juicio necesarios para definirla. En tal sentido el fallo de la Corporación registró el acontecer fáctico en los siguientes términos:

*"Los señores, Pablo Barbosa Hernández, María La Luz Betancurt, Milciades Jaramillo Gutiérrez, Mariano Díaz Díaz y Manuel Rodríguez Anzola, habitantes de la comprensión territorial de Mitú (Vaupés), pertenecientes a comunidades indígenas, acudieron a la Personería Municipal de la misma con el propósito de informar la compra de votos acaecida en los comicios electorales para la Gobernación del Departamento, celebrados el 28 de octubre de 2007; hechos que le imputaron al Señor Representante a la Cámara FABIO ARANGO TORRES, y a uno de los candidatos<sup>3</sup>".*

2. Entonces, los hechos por los cuales fue condenado FABIO ARANGO TORRES ocurrieron en el mes de octubre de 2007, por tanto la normatividad aplicable para estos efectos será el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 5 de la Ley 890 de 2004, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2005 y señala:

**ARTÍCULO 64.** El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad previa valoración de la gravedad de la conducta punible, cuando haya cumplido las dos terceras partes de la pena y su buena conducta durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena. En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa y de la reparación a la víctima.

<sup>2</sup> El texto original ha sido modificado por el artículo 5 de la Ley 890 de 2005 y el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011.

<sup>3</sup> Folio 181 cuaderno de copias 5.

**IV OTRAS DECISIONES**

1. Por el medio más expedito, envíesele copia de este proveído en la oficina jurídica del Establecimiento que lo custodia, para que obre en la hoja de vida del interno.

2. Entréguesele una copia de esta decisión al condenado.

Por lo expuesto, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, Meta,

**V. RESUELVE:**

**PRIMERO:** **NEGAR** el recurso de reposición interpuesto por el condenado **RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO** de acuerdo con lo anotado en precedencia.

**SEGUNDO:** **CONCEDER** la alzada en el efecto suspensivo ante el Juzgado Fallador, acorde a lo señalado por el por el art. 80 y 193 No. 6 de la ley 600 de 2000, en consecuencia, por parte del Centro de Servicios Administrativos de estos despachos serán remitidos los cuadernos originales de la actuación, previo el trámite previsto por el inciso 3° del artículo 194 de la ley 600 de 2000, relativo al traslado común de tres (3) días a los sujetos procesales.

**TERCERO:** Dese cumplimiento al acápite de otras decisiones.

**CUARTO:** Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase

  
**AMPARO LUBILLOS LAVERDE**  
**JUEZ**



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y  
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACÍAS - META

Veinticuatro (24) de Enero de dos mil veinte (2020)

12708  
A-20

CUI:	13 001 31 87 001 2008 00102 00
Número Interno:	2017-0039
Sentenciada:	<b>RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO</b>
Delito:	Concierto para delinquir en concurso heterogéneo con homicidio agravado
Actuación:	De parte
Autoridad:	Especializado
Procedimiento:	Ley 600
Sustanciación No:	0147

En atención a la solicitud de entrevista formulada por el penado **RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO**, el despacho accede a la misma. En consecuencia, una vez se desplace hasta el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacías, Meta, será atendido.

La fecha se le estará dando a conocer oportunamente por intermedio de la oficina jurídica.

Incorporar al expediente documentos enviados por el penado, a través de los cuales pretende demostrar su arraigo social y familiar, los que serán tenidos en cuenta en el momento procesal oportuno.

Comuníquese personalmente al penado esta decisión.

Cumplase,

  
**CARLOS ANDRÉS OSPINA VILLAMIL**  
Juez

6569057

DGH.





Tribunal Superior de distrito  
Judicial de Villavicencio  
Sala Penal

M.P. Alcibiades Vargas Bautista

Sentencia: Segunda Instancia  
Radicado: 13001 31 87 001 2008 00102 01  
Procedencia: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías  
Delito: Concierto para delinquir agravado.  
Condenado: Rafael Ignacio Lara Atencio.  
Decisión: Confirma auto que negó libertad condicional.  
Aprobado: Acta N° 055  
Fecha: 30 de abril de 2020

### ASUNTO

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el condenado **Rafael Ignacio Lara Atencio**, contra el auto de agosto 27 de 2019 mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta) le negó la libertad condicional.

### ANTECEDENTES

1. Mediante sentencia del 28 de diciembre de 2009<sup>1</sup>, el señor **Rafael Ignacio Lara Atencio** fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, a la pena de **324 meses de prisión y multa de 2.000 s.m.l.m.v.**, como responsable del delito de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con homicidio agravado, por hechos ocurridos desde el año 2006 hasta febrero

de 2007. El 3 de febrero de 2011, la sentencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá<sup>2</sup>.

Por esta causa, el condenado se encuentra privado de su libertad desde el **12 de febrero de 2007** hasta la fecha y ha redimido 45 meses y 22.25 días de pena por concepto de trabajo y estudio<sup>3</sup>.

Así mismo, se encuentra privado de su libertad a órdenes de este proceso desde el **18 de julio de 2017** y ha redimido 20 días de pena por concepto de trabajo<sup>4</sup>.

2. El 9 de julio de 2019 el interno solicitó la libertad condicional, al estimar que estaban dados los presupuestos establecidos en el precepto 64 del Código penal, para su concesión<sup>5</sup>.

3. El 27 de agosto siguiente<sup>6</sup>, el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías negó a **Rafael Ignacio Lara Atencio** la libertad condicional.

Señaló que el sentenciado había superado las 3/5 partes de la condena, pues había permanecido más de 194 meses y 12 días en prisión, con lo cual, se cumplía el requisito objetivo contemplado en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 y había demostrado un adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión. Pero estimó que dicha circunstancia no era suficiente para predicar el otorgamiento de la libertad condicional, toda vez que tenía

<sup>1</sup> Sentencia visible a folios 5 y ss de los anexos al trámite de ejecución de penas.

<sup>2</sup> Visible a folios 71 y ss ibidem.

<sup>3</sup> Así lo decretó el A quo en la providencia apelada.

<sup>4</sup> Auto de redención de pena visible a folio 52 del cuaderno de ejecución de penas.

<sup>5</sup> Folios 102-103 cuaderno de ejecución de penas.

<sup>6</sup> Folios 104-107, ibidem.

mayor preponderancia el principio de prevención general "robustecido en la tranquilidad de la comunidad en general".

Lo anterior, dada la "gravedad de la conducta" ejecutada por el penado, quien cometió multiplicidad de delitos en razón a su vinculación con una banda emergente, lo que –agregó–, "ponía de manifiesto la necesidad de su tratamiento penitenciario".

De cara a la gravedad de la conducta textualmente expuso:

"Claro está que el procesado hacía parte de una agrupación criminal, dentro de la cual ejercía el papel de sicario de dicha organización delincuencial, la que se dedicaba a cometer múltiples conductas delictivas como homicidios colectivos en la modalidad de sicariato, hurto de hidrocarburos, extorsiones, cobro de vacunas o cuotas de seguridad a empresarios, ganaderos, comerciantes, etcétera".

"... la conducta punible cometida por el señor **Lara Atencio**, fue muy grave como quiera que hizo parte de una organización al margen de la ley, que ha hecho mucho daño a nuestro país, especialmente a algunas regiones que han tenido que sufrir desplazamiento forzado de sus lugares de residencia, otras que han sido víctimas de las exigencias económicas con las que esas bandas criminales se financian a cambio de no atentar contra sus vidas, y... han quitado la vida de miles de personas."<sup>7</sup>.

Señaló así mismo que el interno no había acreditado su arraigo familiar y social pues, pues junto con su petición no remitió documento alguno, para el efecto.

4. Inconforme con la decisión, el 3 de septiembre de 2019 el condenado interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación<sup>8</sup>. Refirió que en su caso estaban dados los requisitos para conceder el subrogado penal, pues había cumplido las 3/5 partes de la pena impuesta y tenía buen comportamiento durante su tratamiento penitenciario.

<sup>7</sup> Folio 104 y ss cuaderno de ejecución de penas.

<sup>8</sup> Folios 110 y ss. ibidem

Invocó su derecho fundamental a la igualdad y señaló que las leyes eran "desiguales, inequitativas, desproporcionadas e inhumanas" y desconocían la crisis carcelaria generada el hacinamiento de las cárceles del país.

Afirmó que el A quo fundó su decisión en "pronunciamientos de las altas cortes malinterpretadas" y desconoció su proceso de resocialización pues le negó la libertad en razón a su personalidad aspecto que –indicó– "solo podía tenerse en cuenta en la condena", porque "en esta instancia procesal no se debía tener en cuenta a personalidad para el momento de la ocurrencia del hecho sino para el momento final de la ejecución de pena".

No hizo referencia alguna al arraigo.

5. El A quo mediante auto del 30 de septiembre de 2019, confirmó su decisión y concedió la alzada<sup>9</sup>.

## CONSIDERACIONES

1. De conformidad con el artículo 80 de la Ley 600 de 2000 y el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, la Sala tiene **competencia** para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una decisión proferida por un Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de este Distrito Judicial.

2. Inicialmente, debe clarificar la Sala que en este evento, por favorabilidad es aplicable el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, pues

<sup>9</sup> Providencia visible a folio 139-142 ibidem.

resulta menos restrictivo frente a las Leyes 890 de 2004 y 1453 de 2011, debido a que disminuyó el quantum del requisito objetivo de las 2/3 a las 3/5 partes de la pena y no condicionó la concesión del beneficio al pago de la multa<sup>10</sup>.

Para resolver la cuestión planteada, la Sala debe remitirse al artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, que señala:

**"Artículo 30.** Modifícase el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:

**Artículo 64. Libertad condicional.** El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:

1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.
2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.
3. Que demuestre arraigo familiar y social.

Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo.

En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.

El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario".

En cuanto al presupuesto objetivo, las 3/5 partes de los 324 meses de prisión, equivalen 194 meses y 12 días; luego surge evidente que se

<sup>10</sup> Auto del 3 de septiembre de 2014, radicado: 44195, Mp. Patricia Salazar Cuellar. "No cabe duda, en conclusión, que es más favorable al sentenciado el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014. Y aunque no se debe olvidar que allí se introdujo como exigencia de la libertad condicional la demostración del arraigo familiar y social, se trata de un aspecto que puede ser valorado por el Juez con los elementos de prueba obrantes en la actuación o allegados por el peticionario, naturalmente después de comprobar satisfecho el cumplimiento del factor objetivo, que como quedó evidenciado disminuyó a las 3/5 partes, en comparación con el establecido en la Ley 890 de 2004".

satisface este presupuesto, pues, para el día en que fue proferido el auto objeto de apelación<sup>11</sup>, el penado había estado privado de la libertad entre tiempo físico y redimido 196 meses y 7.25 días.

Ahora bien, La conducta de **Rafael Ignacio Lara Atencio** durante el lapso de privación de la libertad en establecimiento carcelario fue calificada en el grado de "ejemplar" lo que evidencian en el condenado que su proceso de resocialización ha sido satisfactorio.

Respecto de la valoración de la conducta punible, la Corte Constitucional, en sentencias C-194 de 2005 y C-757 de 2014, puntualizó:

"...si bien el juez de ejecución de penas debe valorar la conducta punible, debe analizarla como un elemento dentro de un conjunto de circunstancias. Sólo una de tales circunstancias es la conducta punible. Además de valorar la conducta punible, el juez de ejecución de penas debe estudiar el comportamiento del condenado dentro del penal, y en general considerar toda una serie de elementos posteriores a la imposición de la condena. Con fundamento en este conjunto de circunstancias, y no sólo en la valoración de la conducta punible, debe el juez de ejecución de penas adoptar su decisión.

(...) Adicionalmente, el juicio que adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad específica, cuál es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado. En este contexto, el estudio del Juez de Ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado —resuelta ya en la instancia correspondiente, ante el juez de conocimiento— sino desde la necesidad de cumplir una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a los que fueron objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuales son los ocurridos con posterioridad a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión.

(...) Las valoraciones de la conducta punible que hagan los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para decidir sobre la libertad condicional de los condenados debe tener en cuenta todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional."

<sup>11</sup> Auto del 27 de Agosto de 2019.

Dentro de ese marco conceptual y de cara a la valoración de la conducta punible, que de acuerdo con la estructura del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 es presupuesto necesario de evaluación junto con los demás requisitos, resulta imprescindible que el funcionario aborde varios parámetros, tales como la naturaleza del delito, su modalidad y gravedad, la personalidad del interno, la readaptación social del condenado y evalúe las consecuencias que sobrevendrían con la suspensión del tratamiento penitenciario, en armonía con el numeral 2° del mismo artículo 64 y los principios consagrados en el Título I del Código Penitenciario y Carcelario.

Así las cosas, nótese que el juzgador señaló en la sentencia condenatoria que la conducta cometida por **Lara Atencio** era grave, en razón a la organización delictiva de la que hizo parte:

"...tenía como finalidad el control territorial desarrollando actividades criminales como el hurto de hidrocarburos mediante la alteración de combustibles, homicidios selectivos, porte de armas de fuego, boleteo (sic) o vacunas a comerciantes y ganaderos, extorsión, entre otros (...) es una verdadera empresa criminal... dedicara a actividades de narcotráfico, paramilitarismo, sicarito y delincuencia común..., convirtiéndose en un factor de amenaza, inseguridad y temor constante en las regiones donde tenían sus centros de operación y disputa territorial"<sup>12</sup>.

Y agregó que el procesado como miembro de la organización:

"tenía claro de las muertes que se le atribuían..., se concertó para la comisión de conductas de variada índole, que vulneran bienes jurídicos protegidos desde la norma constitucional y plasmados en la norma punitiva... actitud delincencial contraria a las normas de convivencia ciudadana bajo principios de solidaridad y respeto por los derechos de los demás...."<sup>13</sup>.

De la ponderación de la gravedad de la conducta, el comportamiento intramural del sentenciado, al igual que su proceso resocializador, se desprende un juicio negativo que impide concederle la libertad condicional.

Lo anterior, en razón a que, a pesar de exhibir un adecuado proceso resocializador en el establecimiento penitenciario, en cuanto realizó actividades de redención de pena, no puede dejarse de lado que del estudio efectuado por el fallador en la sentencia condenatoria referida, se advierte la gravedad de las conductas desplegadas por el sentenciado, pues hizo parte de una organización criminal y violentó diversos bienes jurídicos de toda una comunidad, además, pese a haberse desmovilizado continuó desarrollando actividades delictivas por las que fue condenado, de lo que se concluye que debe continuar en el establecimiento carcelario en el que se encuentra recluso, a efecto de que cumpla la función resocializadora de la pena, contemplada en el artículo 4 de la Ley 599 de 2000.

Además de lo anterior, tampoco acreditó el arraigo social y familiar exigido, pues no aportó documento alguno para su valoración.

3. Esta Sala tampoco encuentra sustento en las afirmaciones del recurrente cuando afirma que se vulneró el derecho fundamental a la igualdad, pues, no acreditó que el juez executor hubiese concedido a otras personas en circunstancias similares a la suya la libertad condicional. Es una apreciación propia del penado que no está sustentada probatoriamente.

<sup>12</sup> Fol. 5 y ss del os anexos del trámite de ejecución de penas.

<sup>13</sup> Ibidem.

Así las cosas, acertó el *A quo* al negar al sentenciado la libertad condicional solicitada, por cuanto no concurren íntegramente las exigencias contempladas en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014. En consecuencia, la decisión en este sentido, será confirmada.

En razón de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio,

**RESUELVE:**

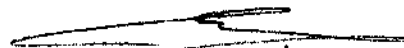
- 1. Confirmar** la decisión apelada con fundamento en lo expuesto en esta providencia.
- 2. Contra** la presente decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese, cúmplase y devuélvase.



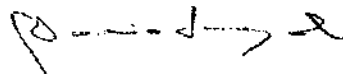
**ALCIBIADES VARGAS BAUTISTA**

Magistrado



**PATRICIA RODRÍGUEZ TORRES**

Magistrada



**JOEL DARIO TREJOS LONDOÑO**

Magistrado



Tribunal Superior de distrito  
Judicial de Villavicencio  
Sala Penal

M.P. Alcibíades Vargas Bautista

Sentencia: Segunda Instancia  
Radicado: 13001 31 87 001 2008 00102 01  
Procedencia: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de  
Acacias  
Delito: Concierto para delinquir agravado.  
Condenado: Rafael Ignacio Lara Atencio.  
Decisión: Adara providencia  
Aprobado: Acta N° 074  
Fecha: 29 de mayo de 2020

## ASUNTO

Se resuelve la solicitud de aclaración del auto del 30 de abril de 2020<sup>1</sup> instaurada por el condenado, **Rafael Ignacio Lara Atencio**.

## ANTECEDENTES

1. Mediante sentencia del 28 de diciembre de 2009<sup>2</sup>, el señor **Rafael Ignacio Lara Atencio** fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, a la pena de **324 meses de prisión y multa de 2.000 s.m.l.m.v.**, como responsable del delito de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con homicidio agravado, **por hechos ocurridos desde el año 2006 hasta febrero de 2007**. El 3 de febrero de 2011, la sentencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Aprobado mediante Acta No. 055. Mediante el que se confirmó la decisión que le negó la libertad condicional.

<sup>2</sup> Sentencia visible a folios 5 y ss de los anexos al trámite de ejecución de penas.

<sup>3</sup> Visible a folios 71 y ss ibidem.

Por esta causa, el condenado se encuentra privado de su libertad desde el **12 de febrero de 2007** hasta la fecha y ha redimido 45 meses y 22.25 días de pena por concepto de trabajo y estudio<sup>4</sup>.

Así mismo, se encuentra privado de su libertad a órdenes de este proceso desde el **18 de julio de 2017** y ha redimido 20 días de pena por concepto de trabajo<sup>5</sup>.

2. El 9 de julio de 2019 el interno solicitó la libertad condicional, al estimar que estaban dados los presupuestos establecidos en el artículo 64 del Código penal, para su concesión<sup>6</sup>.

3. El 27 de agosto siguiente<sup>7</sup>, el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias negó a **Rafael Ignacio Lara Atencio** la libertad condicional, decisión que fue confirmada por este tribunal mediante auto del 30 de abril de 2020.

4. A través de petición allegada al correo institucional de la Secretaría de esta Corporación, el penado solicitó la "rectificación" del proveído de fecha 30 de abril de 2020, en concreto, expuso que en el mismo se afirmó que él **"cometió multiplicidad de delitos"** cuando **"solo fue condenado por dos delitos"** y se dijo **"fue desmovilizado"** pese a que **"nunca perteneció a ningún grupo al margen de la ley y no existían archivos relacionadas con que sea desmovilizado"**.

<sup>4</sup> Así lo decretó el A quo en la providencia apelada.

<sup>5</sup> Auto de redención de pena visible a folio 52 del cuaderno de ejecución de penas.

<sup>6</sup> Folios 102-103 cuaderno de ejecución de penas.

<sup>7</sup> Folios 104-107, ibidem.



Por ello, solicita la rectificación de la providencia al considerar que dichas afirmaciones **"son falsas y malintencionadas"**.

## CONSIDERACIONES

1. El artículo 412 de la ley 600 de 2000 (aplicable al caso por vía de integración) señala:

"La sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisión que la hubiere dictado, salvo en caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de omisión sustancial en la parte resolutive.

Solicitada la corrección aritmética, o del nombre de las personas a que se refiere la sentencia, la aclaración de la misma o la adición por omisiones sustanciales en la parte resolutive, el juez podrá en forma inmediata hacer el pronunciamiento que corresponda".

Esta disposición debe ser concordada con el artículo 286 del Código General del Proceso que señala:

"ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, **siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella**". (Resalto fuera de texto)

De conformidad con las anteriores disposiciones, la aclaración solicitada por el peticionario resulta procedente, toda vez que, si bien el error en las expresiones utilizadas por la Sala, no aparecen en la parte resolutive de

la decisión, si influyen en la misma e incluso a futuro pueden dar lugar a equivocadas interpretaciones en perjuicio del sentenciado.

2. Examinado el texto de las sentencias de primera<sup>8</sup> y segunda<sup>9</sup> instancia, proferidas en contra del condenado, se constata que la actuación penal a la que fue vinculado el señor **Rafael Ignacio Lara Atencio** y por la que se encuentra purgando una pena de prisión en establecimiento carcelario, tuvo lugar por su vinculación con la organización criminal llamada **"Banda de los 40 o la Empresa"**, estructura que pertenecía a las "denominadas bandas emergentes o Águilas Negras" y que surgieron con posterioridad al proceso de desmovilización de las Autodefensas. Esta organización delictiva tuvo injerencia principalmente en la Costa Atlántica, especialmente en Cartagena y en la cual, **Lara Atencio** era conocido con el alias de "El nene".

En efecto, el juzgador señaló en la sentencia condenatoria que **Lara Atencio** hizo parte de una organización delictiva que tenía como fin:

"...el control territorial desarrollando actividades criminales como el hurto de hidrocarburos mediante la alteración de combustibles, homicidios selectivos, porte de armas de fuego, boleteo (sic) o vacunas a comerciantes y ganaderos, extorsión, entre otros (...) es una verdadera empresa criminal... dedicara a actividades de narcotráfico, paramilitarismo, sicario y delincuencia común..., convirtiéndose en un factor de amenaza, inseguridad y temor constante en las regiones donde tenían sus centros de operación y disputa territorial"<sup>10</sup>.

Y agregó que el procesado como miembro de la organización:

"tenía claro de las muertes que se le atribuían,..., se concertó para la comisión de conductas de variada índole, que vulneran bienes jurídicos protegidos desde

<sup>8</sup> Sentencia proferida el 28 de diciembre de 2009 por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, visible a folios 15 y ss del cuaderno de EPMS.

<sup>9</sup> Sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 3 de febrero de 2011, visible a folios 71 y ss ibídem.

<sup>10</sup> Fol. 5 y ss del os anexos del trámite de ejecución de penas.

la norma constitucional y plasmados en la norma punitiva, actitud delincuencial contraria a las normas de convivencia ciudadana bajo principios de solidaridad y respeto por los derechos de los demás. ...<sup>11</sup>.

Fueron esas las razones por las que el Juez de Ejecución de Penas indicó en el auto del 27 de agosto de 2019, mediante el que le negó la libertad condicional que el procesado **"cometió multiplicidad de delitos"**. Ello para referirse a los actos ejecutados por la banda criminal de la que hizo parte, lo que determinó su condena por el delito de concierto para delinquir agravado. Esta afirmación -se enfatiza- fue realizada por el juez ejecutor y no por esta Corporación.

3. Ahora bien, es cierto que en el cuerpo del auto del que se peticiona "rectificación" se indicó textualmente: "...además, pese a haberse **desmovilizado** continuó desarrollando actividades delictivas". Esta afirmación no se encuentra acreditada, pues, si bien, la organización delictiva de la que hizo parte el penado (**Banda de los 40 o la Empresa**), surgió con posterioridad a la desmovilización de los grupos denominados "Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-", no existe evidencia dentro del proceso respectivo de que el señor **Rafael Ignacio Lara Atencio** se hubiese "desmovilizado" de alguna organización criminal, antes o con posterioridad a los hechos, por los que fue objeto de condena. Por lo anterior, razón le asiste al peticionario y en tal sentido el auto será aclarado para indicar que el señor **Rafael Ignacio Lara Atencio no ostenta la condición de desmovilizado de organización ilegal alguna**, como equivocadamente se consignó en el párrafo 2, folio 8 de las consideraciones de la providencia cuestionada.

Por tanto, se accederá parcialmente a la aclaración solicitada.

<sup>11</sup> Ibidem.

En razón de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio,

#### RESUELVE:

1. **Corregir** el error de escritura que se registra en el párrafo 2, folio 8 de las consideraciones del auto preferido por esta Sala el 30 de abril de 2020, el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias negó a **Rafael Ignacio Lara Atencio** la libertad condicional, en el sentido de precisar que **Rafael Ignacio Lara Atencio no ostenta la condición de desmovilizado de organización ilegal alguna**, como fallidamente se consignó en la providencia cuestionada.

2. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese, cúmplase y devuélvase.

  
**ALCIBIADES VARGAS BAUTISTA**

Magistrado

  
**PATRICIA RODRÍGUEZ TORRES**

Magistrada

  
**JOEL DARIO TREJOS LONDOÑO**

Magistrado



Sala Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACÍAS -  
META

Veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020).

CUI: 13 001 31 87 001 2008 00162 00  
Número Interno: 2017-0039  
Sentenciada: RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO  
Delito: Concierto para delinquir en concurso  
heterogéneo con homicidio agravado  
Actuación: De parte  
Autoridad: Especializado  
Procedimiento: Ley 600  
Sustanciación N°: 1503

Anéxese a la presente ejecución de sentencia la decisión de segunda instancia, allegada por correo electrónico de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, luego de haber confirmado nuestro auto 1871 del 27 de agosto de 2019, por medio del cual se negó la libertad condicional al condenado **RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO**.

De otro lado, en memorial que antecede el sentenciado **RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO**, solicita al Juzgado, una vez más, la concesión de su libertad condicional, situación que el Juzgado ya resolvió en forma negativa el 27 de agosto de 2019, a través del auto 1871, providencia en la cual fue la valoración de la conducta punible el argumento fundamental para despachar desfavorablemente la petición y notificado en debida forma de la aludida providencia, el señor **LARA ATENCIO**, interpuso recurso para la cual en segunda instancia, el H. Tribunal Superior en acta 055 del 30 de abril de 2020, confirmó la decisión de este Despacho y es por ello que en esta oportunidad se debe señalar que los criterios expuestos en el auto atacado y ya confirmado, en la actualidad mantienen vigencia y a esos contenidos se continuará sometiendo, pues, en aquella oportunidad se negó el beneficio al considerar: "que la conducta punible cometida por el señor LARA ATENCIO, fue muy grave como quiera que hizo parte de una organización al margen de la ley, que ha hecho mucho daño a nuestro país, especialmente a algunas regiones que han tenido que sufrir desplazamiento forzado de sus lugares de residencia, otras que han sido víctimas de las exigencias económicas con las que esas bandas criminales se financia, a cambio de no atentar contra su vida, y en otros casos, en muchas ocasiones han quitado la vida de cientos de personas. Vemos a lo largo del fallo condenatorio, como el Juez de conocimiento, hace referencia a las diferentes actividades ilícitas a las que se dedican estos grupos emergentes o bandas criminales, que solo tienen fines ilícitos, pues solo buscan hacer daño a la población en general para obtener un beneficio económico, a costa incluso de dejar la vida de personas de bien que se oponen en su caminar delictivo, o porque están interponiéndose en la expansión de su estructura criminal, o porque no cumplen compromisos que previamente han hecho, o por diferentes situaciones que no tienen justificación alguna, pues no solamente afectan con sus acciones el patrimonio de personas de bien, trabajadoras y honestas, sino que además, atentan contra el bien jurídico más importante para todo ser humano como lo es la vida, pues aún el más mínimo reparo van disponiendo de ella sin como alguno de escrúpulos y respeto por los derechos ajenos, causando en la población en general de un barrio, zona, región o país temor y repulsa por la clase de conductas desplegadas por esa clase de

dime.

personas, porque con sus acciones lo único que hacen es daño y nada los puede llevar a cometer esa clase de delitos. Esta situación e no dudario se constituye en unas circunstancias negativas para efectos del otorgamiento de la libertad condicional, ya que con su propia actuación puso de manifiesto que requería tratamiento penitenciario y de consuno, que sirviera de ejemplo no sólo al condenado sino a la propia sociedad que ese tipo de conductas no pueden ser pasadas por alto y ello está denotado de la gravedad de su comportamiento."

Conforme lo anterior, el despacho negó el subrogado penal de libertad condicional, es decir, con fundamento en la valoración de la conducta punible, y revisada la actuación no se observa que hayan elementos nuevos para modificar la decisión que en pasada oportunidad adoptó el Despacho en torno a ese asunto, situación que no le permite a este juzgado, conceder al menos por el momento el subrogado de libertad condicional y por ese mismo motivo no hará un nuevo pronunciamiento.

Y para mayor comprensión, se transcribe aparte de sentencia de tutela proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el radicado No. 2019-00087, en la que se expresó lo siguiente:

"En efecto, la Corte Constitucional ha dicho que materia de acceso a la administración de justicia, y de formulación de peticiones ante las autoridades judiciales en el marco de un proceso judicial, no procede la tramitación de solicitudes relativas a asuntos previamente estudiados por la autoridad competente, los cuales hayan sido respondidos en forma oportuna y debida, siempre y cuando (i) se basen en la misma realidad probatoria y (ii) reiteren identidad de razonamiento jurídico. Así, cuando una autoridad enfrente una petición reiterativa ya resuelta, ésta puede remitirse a las respuestas anteriores sin necesidad de emitir un nuevo pronunciamiento que estudie el fondo de la cuestión debatida. Esto se sustenta en los principios de eficacia y economía en la labor judicial."

Lo anterior no es óbice para auar al solicitante para continuar con su sometimiento al proceso penitenciario, evidenciando una conducta ejemplar, el aprovechamiento de los programas y cursos que para su desarrollo y crecimiento se ofertan en el penal, y respetando a sus congéneres reconociendo en todos el principio fundante y derecho fundamental de la dignidad humana.


Finalmente, como quiera que el señor **RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO**, en su escrito fechado 11 de mayo de 2020, solicita se rectifique la información registrada en el interlocutorio 2154 del 30 de septiembre de 2019, frente a lo que se registró: "además se tuvo en cuenta que el condenado hacía parte de los sicarios de esa organización, como él mismo lo manifestó, tal y como puede leerse en el acapite de la responsabilidad (sic)." considerando que esa información es falsa porque nunca aceptó esas injurias ni calumnias y si son atentatorias contra su dignidad humana, el Despacho, frente a esa anotación, aclara que si bien es cierto en interlocutorio 2154 del 30 de septiembre de 2019, se plasmó en el cuerpo de la providencia, entre otras: "además se tuvo en

dlme.

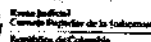
fuente que el condenado hacia parte de los sicarios de esa organización, como él mismo lo manifestó, esta expresión como él mismo lo manifestó, no aparece dentro del contexto de la sentencia condenatorio por lo que consecuencialmente se accede a lo solicitado por RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO, aclarando el auto 2154 del 30 de septiembre de 2019, en el sentido que aquel, entiéndase como RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO, no manifestó haber hecho parte de los sicarios de la organización al margen de la ley.

Entérese al condenado de la presente decisión.

CÚMPLASE,

  
CARLOS ANDRÉS OSPINA VILLAMIL  
Juez

dlme.



JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y  
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS. - META.

Veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020)

CST: 13 DEC 31 07 061 7036 2022 00  
Número Interno: 2067 - 00039  
Destinatario: MARCEL DOMINGUEZ LARA ASESINIO  
Delictivo: Conspiración para delinquir y homicidio agravado  
Admisión: De 24/06/06  
Autoridad: Asesinado  
Procedimiento: Ley 800  
Sustanciación No: 1970

Este juzgado el 28 de septiembre del presente año, profirió el auto número 1653, con el nombre ALFONSO RAFAEL LARA ATENCIO, quien es hermano del condenado, lo cierto es que, quien formuló la petición fue el señor RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO, por tanto, se deja sin efecto jurídico, la decisión en mención, y se procede a emitir decisión frente al penado en este proceso.

El señor **RUBEN IGNACIO LARA ATENCIO** en el que solicita al despacho se conceda en su favor la libertad condicional, por aplicación del artículo 64 original de la ley 599 de 2000, indicando se trata de un argumento nuevo; sin embargo, al revisar las decisiones de fechas 27 de agosto y 30 de septiembre de 2019, preferidas por este juzgado, y 30 de abril de 2020, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, se advierte que ese tema ya fue decantado, dejándose claro que, por principio de legalidad la norma a emplearse es la de la ley 890 de 2004, y que por favorabilidad la es más beneficioso el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014.

Ahora bien, las razones para negar libertad condicional no han cambiado, es decir, en lo relacionado con la valoración de la conducta, pues el despacho continúa con el mismo criterio.

Adicional a lo anterior, se tiene que, contra Interlocutorio que negó la libertad condicional, al perorado interpuso recurso de reposición y apelación, siendo negado el primero y la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, al desatar el recurso de alzada, mediante providencia del 30 de abril de 2020, confirmó nuestra decisión.

Por lo antes expuesto, el juzgado se abstendrá de decidir de fondo la solicitud del mencionado subrogado.

En relación con esto es importante señalar un aparte de providencia de tutela de 1ª instancia, dentro de radicado terminado en 2019-00087 en la que la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio señaló:

"En efecto, la Corte Constitucional ha dicho que en materia de acceso a la administración de justicia, y de formulación de peticiones ante las autoridades judiciales en el marco de un proceso judicial, no procede la tramitación de solicitudes relativas a asuntos previamente estudiados por la autoridad competente, los cuales hayan sido respondidos en forma oportuna y debida, siempre y cuando (i) se basen en la misma realidad probatoria y, (ii) reiteren idénticas de razonamiento jurídico. Así, cuando una autoridad enfrenta a una petición reiterativa ya resuelta, ésta puede remitirse a las respuestas anteriores sin necesidad de emitir un nuevo pronunciamiento que agudice el fondo de la cuestión debatida. Esto es sustancial en los principios de eficacia y economía en la labor judicial".

Entérese al condenado de la presente decisión.

**CLIMATE-SIZE**

*[Handwritten signature]*  
CARLOS ANDRÉS OSPIÑA VILLALBA  
Juez

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
ACACIAS META

ALTO No. 1860 del 28/10/2020  
E.S. 2017 - 00039

## CONSTANCIA DE ENTENDIMIENTO

En senda. Mesa a los \_\_\_\_\_ en el \_\_\_\_\_  
**RAFAEL IGNACIO LARA ATENCIO.**  
 Firmado \_\_\_\_\_  
 Querido \_\_\_\_\_

Copia per